

Sebastián Mejías O.
 sebastianmejias@mercuriovalpo.cl

Fue hace unos días que el subsecretario del Interior, Luis Condero, informó, en una actividad de la CEPAL, que el Gobierno estudia efectuar una regularización “acotada” que podría beneficiar hasta 182 mil inmigrantes que entregaron sus antecedentes en un proceso de empadronamiento biométrico que se abrió en 2023. Tal medida fue valorada por algunos gremios empresariales, como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), liderada por Ricardo Mewes, y la Sociedad Nacional de Agricultura, presidida por Antonio Walker, pero duramente criticada por parlamentarios.

Desde la oposición temen que la propuesta del Gobierno no sea más que un “perdonazo” que terminará incentivando el ingreso irregular al país. El diputado Andrés Longton (RN) dijo que “si bien algunos sectores empresariales ven esto como una solución, su interés parece estar más enfocado en cubrir necesidades de mano de obra barata que en el bienestar del país”.

Y es que, a su juicio, “este empadronamiento no sólo genera un efecto de llamada que agravará la crisis migratoria, sino que también normaliza la impunidad”. De ahí que para evitar que este tipo de decisiones las tome el Ejecutivo de manera unilateral, en el marco de la última discusión presupuestaria se aprobó una indicación presentada precisamente por Longton, para que una determinación de estas características deba pasar por la legitimidad de ambas cámaras del Congreso, indicación que La Moneda busca que sea declarada inconstitucional.

“El Gobierno busca vetar nuestra indicación, que es fundamental, porque condiciona la regularización masiva de migrantes que ingresaron ilegalmente”, reclamó.

CONSECUENCIAS

La diputada Camila Flores (RN) también fustigó la posición de ciertos gremios empresariales frente a este llamado “perdonazo”. Según comentó, “las consecuencias de vivir con una inmigración descontrolada en el país la viven los chilenos co-



LA OPOSICIÓN CRITICA POSTURA DE GREMIOS EMPRESARIALES QUE APUNTAN A UNA NECESARIA REGULARIZACIÓN. “BUSCAN MANO DE OBRA BARATA”, ACUSAN.

Parlamentarios de la región rechazan eventual “perdonazo” del Gobierno a inmigrantes ilegales

POLÍTICA. Diputados de oposición formulan duros reparos y temen que tal medida pueda generar un nuevo incentivo al ingreso irregular. Critican, además, posición de gremios empresariales.

“Es importante que se impulsen procesos migratorios ordenados que permitan garantizar que el ingreso de personas a nuestro territorio sea seguro, planificado y beneficioso”.

Javier Torrejón
 Presidente de la Cámara Regional del Comercio

munes y corrientes, no los grandes empresarios”. “Lo que viven los chilenos comunes y corrientes es muy distinto a lo que ellos están planteando”, agregó, consciente de que “la gente no quiere perdonazo, sino que se expulsen a los inmigrantes”.

“Solicitaré mediante oficio que se demuestre detalladamente que cada inmigrante al que se le pretende hacer este perdonazo no cuenta con antecedentes penales”.

Hotuiti Teao
 Diputado (indep.-Evópoli)

Para Flores, lo que hace es

“Este empadronamiento no sólo genera un efecto de llamada que agravará la crisis migratoria, sino que también normaliza la impunidad”.

Andrés Longton
 Diputado (RN)

ta iniciativa del Gobierno es dar una señal de apertura que descontrolaría aún más el ingreso irregular de extranjeros. “No queremos que se hagan in-

centivos para que vengan más inmigrantes al país”, reclamó.

“ES INACEPTABLE”

A juicio del diputado republicano Luis Fernando Sánchez, esta eventual regularización tendrá un impacto en el funcionamiento normal del Estado. Precisa que hoy “los servicios públicos están colapsados y lo ejemplifico con las muchas familias que no encuentran cupo en jardines Junji o que sufren las listas de espera en hospitales”. Por esa razón, considera que “regularizar migrantes es inaceptable y lo fundamental es que vuelvan a sus países”.

También tuvo palabras du-

CRCP valora aporte migratorio, pero reconoce su impacto negativo

Como presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Javier Torrejón también tuvo palabras que reconocen el aporte de la migración positiva, pero no se olvida del impacto que el descontrol fronterizo tiene en el aumento de la delincuencia y la criminalidad.

Por un lado, dijo que como gremio “reconocemos que los migrantes han sido y siguen siendo fundamentales para el desarrollo de nuestra región”, pero también está claro de que hoy el “escenario complejo, donde no se ha podido controlar el ingreso ilegal de migrantes por nuestras fronteras, lo que plantea una serie de desafíos tanto en términos de seguridad como de integración y la entrega de servicios básicos”.

De lo que se trata, puntualizó, es de impulsar “procesos migratorios ordenados que permitan garantizar que el ingreso de personas a nuestro territorio sea seguro, planificado y beneficioso para todos”. Agregó que “es fundamental que se implementen mecanismos efectivos de control fronterizo que nos permitan conocer con claridad quiénes llegan, verificando su identidad, antecedentes y disposición para contribuir laboralmente”.

Señaló que “es importante contar con una economía que pueda absorber esta fuerza laboral, considerando los desafíos actuales, como las altas tasas de desempleo que enfrentamos y el lento crecimiento económico en la región”. “Como gremio, estamos dispuestos a trabajar de manera colaborativa para avanzar sobre esta materia”, indicó.

ras contra el empresariado, calificando sus posturas como “preocupantes”.

Lo mismo cree su par republicana Chiara Barchiesi, quien sostuvo que “en un contexto en el que Chile enfrenta altos niveles de desempleo, no podemos permitir que los intereses empresariales estén por sobre el respeto a la ley y la seguridad de nuestros ciudadanos”. “Es

AGENCIA UNO



REGULARIZACIÓN PODRÍA TENER QUE PASAR POR EL CONGRESO.

preocupante que algunos sectores promuevan regularizaciones migratorias que, lejos de solucionar el problema, podrían agravar la crisis social y económica que vive el país”, indicó.

En tanto, el diputado Hottuti Teao (Índep.-Evópoli) indicó que ser crítico de la medida del Ejecutivo “no significa que no exista empatía por quien quiere venir a aportar al país”, dando cuenta de que estos procesos “deben hacerse de manera regular y ordenada”.

“El perdonazo a irregulares en Chile costará recursos que necesitan los más vulnerables de nuestro país”, señaló, y por eso, desde su rol fiscalizador, anunció que “mediante oficio y ante la Comisión de Gobierno Interior pedí que se muestre detalladamente que cada inmigrante al que se le pretende hacer este perdonazo no cuente con antecedentes penales ni delictuales de ningún tipo”.

Al menos, busca que se asegure “que no se seguirá agudizándose la crisis delictual descontrolada que hoy día existe en nuestro país a causa de la mala gestión de esta administración”.

“CONTRIBUYE AL PAÍS”

Radicalmente opuesta es la mirada que tiene sobre el tema el padre Pedro Nahuelcura Vargas, vicario Pastoral y director del Departamento de Movilidad Humana del Obispado de Valparaíso, quien está convencido que este debate “en tiempos de Navidad puede ser una buena oportunidad para renovar los esfuerzos por un país más justo e inclusivo, y una política más eficaz y menos de trincheras”.

Citando a monseñor Sergio

182.000

inmigrantes ilegales podrían, eventualmente, ser beneficiados con esta medida que analiza La Moneda.

“La regularización no sólo beneficia a los migrantes, sino que también contribuye al desarrollo del país, al permitir que estas personas participen de la vida económica y social”.

Sacerdote Pedro Nahuelcura
 Depto. Movilidad Humana
 Obispado de Valparaíso

Pérez de Arce, arzobispo de Concepción y secretario general de la Conferencia Episcopal, Nahuelcura hace “un llamado a las autoridades y a otros actores políticos a favorecer estrategias eficaces que permitan la regularidad migratoria de quienes no tienen problemas delictuales o penales”.

“Hoy son más de 180.000 las personas que libremente entregaron sus datos en el empadronamiento biométrico realizado en los años 2023-2024”, puntualizó, seguro de que “muchos de ellos cuentan ya con vínculos familiares en el país, trabajan entre nosotros y estudian en nuestras escuelas”.

Son personas que, a su juicio, “son necesarias para el funcionamiento de la economía, porque constituyen una fuerza laboral que el país requiere”.

La regularización, agregó, “no sólo beneficia a los migrantes, sino que también contribuye al desarrollo del país, al permitir que estas personas participen plenamente de la vida económica y social”. Y por ello, aclaró, “sería un grave error igualar a los migrantes irregulares con delincuentes. Es una visión simplista e injusta que no aborda la realidad de una población que ya trabaja, estudia y forma parte de las comunidades locales”.